

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA



Bogotá, D.C., 12 MAR 2020

Referencia: 14012015009
Investigación: Jurisdiccional por Siniestro Marítimo – Auto

ANTECEDENTES

1. El Capitán de Puerto de Santa Marta, el día 31 de marzo de 2016 profirió decisión de primera instancia, a través de la cual declaró responsable por la ocurrencia del siniestro marítimo de naufragio a la empresa BEELMAR S.A., en condición de propietaria de la motonave "ORCA V" de bandera panameña. De igual forma, la declaró responsable por violación a las normas de Marina Mercante, imponiendo a título de sanción, multa de CINCO (05) salarios mínimos legales mensuales vigentes, suma que asciende a TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. (\$ 3.447.270.00), pagaderos de manera solidaria con la agencia marítima MAR Y SOL SHIPPING S.A.S.

Por último, no fijó avalúo de los daños como consecuencia del siniestro marítimo acaecido, al no contar con suficiente material probatorio que le permitiera establecerlos.

2. Al no interponerse el recurso de reposición en subsidio apelación mediante apoderado judicial de acuerdo a lo establecido por el Decreto Ley 2324 de 1984, en consonancia con el Código General del Proceso, el Capitán de Puerto de Santa Marta rechazó los recursos incoados y envió el expediente a este Despacho en vía de consulta, conforme lo establecía el artículo 57 del Decreto Ley en referencia.

COMPETENCIA

De conformidad con lo establecido en el artículo 5, numeral 27 del Decreto Ley 2324 de 1984, el numeral 2, artículo 2 del Decreto 5057 de 2009 y el artículo 64 del Decreto Ley 2106 de 2019, corresponde a la Dirección General Marítima,

CMZ

adelantar, fallar y conocer las investigaciones por siniestro marítimo en sede de consulta en áreas de su jurisdicción.

Dicha competencia tiene el carácter de jurisdiccional, en aplicación del Decreto Ley 2324 de 1984, en concordancia con el artículo 116 de la Constitución Política, lo cual fue ratificado por la Corte Constitucional en sentencia C-212 de 1994 y mediante Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, con Radicado 1605, del 4 de noviembre de 2004.

CONSIDERACIONES DEL DIRECTOR GENERAL MARÍTIMO

Teniendo en cuenta los antecedentes descritos, se tienen las siguientes consideraciones:

El Decreto Ley 2324 de 1984, disponía inicialmente en su artículo 57 lo referente a la competencia de la Dirección General Marítima, para conocer de las consultas de los fallos de primera instancia que no fueren apelados, de la siguiente manera:

“Los fallos de primera instancia serán consultados al Director General Marítimo, cuando no se interponga oportunamente el recurso de apelación. La decisión de los fallos consultados se hará de plano, sin que sea necesario escuchar a las partes interesadas.” (Cursiva fuera del texto original)

No obstante, mediante la expedición del Decreto Ley 2106 del 2019¹, el cual entró en vigencia el 22 de noviembre de 2019, determinó en su artículo 64 la modificación del artículo mencionado con antelación, en los siguientes términos:

“Artículo 57. Consulta. Los fallos de primera instancia en los que se determine el avalúo de daños por un valor igual o mayor a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, serán consultados al Director General Marítimo cuando no se interponga oportunamente el recurso de apelación. La decisión de los fallos consultados se hará de plano, sin que sea necesario escuchar a las partes interesadas.” (Cursiva fuera del texto original)

De conformidad con el contenido de la norma en referencia es posible colegir que, para que los fallos emitidos en primera instancia por los Capitanes de Puerto de las respectivas jurisdicciones sean consultados al Director General Marítimo, deben cumplir dos presupuestos formales, a saber: (i) La determinación en el fallo de primera instancia del avalúo de los daños por un valor igual o mayor a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes y, (ii) La no interposición de recursos de apelación dentro del término establecido.

¹ Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública.

CM7

Para el caso en concreto, se evidencia que el fallo proferido en primera instancia por el Capitán de Puerto de Santa Marta, no cumple con las exigencias descritas por la norma, como quiera que no se fijó el avalúo de los daños en la decisión emitida el 31 de marzo de 2016, como consecuencia del siniestro marítimo de naufragio de la motonave "ORCA V".

De igual manera, es procedente acotar que una vez proferido el fallo de primera instancia por el Capitán de Puerto de Santa Marta el día 31 de marzo de 2016, la citada providencia fue notificada personalmente el día 17 de mayo de 2016 al señor EDGAR ANTONIO ROMERO PATERNINA, en condición de representante legal de la agencia marítima MAR Y SOL SHIPPING S.A.S.

Posteriormente, el día 25 de mayo de 2016, el señor DOUGLAS HERNANDEZ AVILA en condición de representante legal de la Sociedad BEELMAR S.A., propietario de la motonave "ORCA V", presentó recurso de reposición y en subsidio apelación en contra del fallo de primera instancia. Sin embargo, mediante auto de fecha 3 de octubre de 2019, el Capitán de Puerto de Santa Marta rechazó los recursos interpuestos, toda vez que fue realizado sin la debida representación de un apoderado judicial.

Luego de que se surtieran las notificaciones correspondientes, la investigación fue enviada mediante oficio interno No. 191543 MD-DIMAR-CP04-JURIDICA de fecha 19 de noviembre de 2019 a la Dirección General Marítima con fin de que el fallo fuera consultado a este Despacho, conforme lo establecía el artículo 57 del Decreto Ley 2324 de 1984.

No obstante, a la fecha de ser analizada la presente investigación para resolver en consulta por parte de esta Dirección General, la norma que establecía los presupuestos del referido grado jurisdiccional ha perdido vigencia, toda vez que fue modificada como consecuencia de lo estipulado en el artículo 64 del Decreto Ley 2106 del 2019, el cual ha entrado en vigor a partir del 22 de noviembre de 2019, tal y como se señaló con antelación. Adicionalmente, cabe resaltar que la citada norma no estableció expresamente un régimen de transición.

De tal suerte que, queda claro que la norma por la cual el Capitán de Puerto de Santa Marta había remitido la investigación, fue modificada con posterioridad de manera sustancial al incluir un presupuesto adicional, por lo que atendiendo al principio de "*lex posterior derogat anterior*"², este Despacho debe dar cabal aplicación al Decreto Ley en comento, de acuerdo a las reglas de vigencia que establece la norma, aunado a lo dispuesto por el Código General del Proceso³ en cuanto a la observancia de las normas procesales, el cual preceptúa que estas son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento.

² Sentencia C-443 de 1997, reiterada en Sentencia C-348/17, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo. Exp. D-11787.

³ Ley 1564 de 2012. Artículo 13.

Por tal motivo, con el objeto de dar riguroso acatamiento a lo establecido por el artículo 64 del Decreto Ley 2106 del 2019, este Despacho ordenará la devolución de la investigación a la Capitanía de Puerto de Santa Marta para el acatamiento de lo dispuesto en el fallo proferido en primera instancia.

En mérito de lo anteriormente expuesto, el Director General Marítimo,

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- NO SURTIR el grado jurisdiccional de consulta conforme a las consideraciones del presente auto y ordenar al Capitán de Puerto de Santa Marta dar cumplimiento al contenido del fallo de fecha 31 de marzo de 2016, proferido dentro de la investigación por siniestro marítimo de naufragio de la motonave “ORCA V”.

ARTÍCULO 2°.- NOTIFICAR personalmente por conducto de la Capitanía de Puerto de Santa Marta el contenido de la presente decisión al señor DOUGLAS GERARDO HERNÁNDEZ ÁVILA, en condición de representante legal de la Sociedad BEELMAR S.A., propietaria de la motonave “ORCA V”, al representante legal de la agencia marítima MAR Y SOL SHIPPING S.A.S., y demás partes interesadas, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 46 y 62 del Decreto Ley 2324 de 1984.

ARTICULO 3°.- Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase, 12 MAR 2020


Contralmirante **JUAN FRANCISCO HERRERA LEAL**
Director General Marítimo (E)